

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF) MARTÍN KAUFMANN

Por Jorge Carpio y Patricia Davolos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF)

Martín Kaufmann es sociólogo y profesor universitario. Fue Secretario Académico y Vicerrector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Actualmente es su Rector para el ejercicio 2023-2027. Desde 1994 es Vicepresidente la Fundación Foro del Sur, organización privada sin fines de lucro que, entre otras actividades, publica desde 1995 Archivos del Presente, revista de actualidad internacional, de la cual es el Coordinador General. Es el Director Institucional de BIENALSUR (Bienal internacional de Arte Contemporáneo) que se realizó en 2017, 2019 y 2021 en forma simultánea en más de cuarenta ciudades de veinte países.

ANTE EL DIFÍCIL MOMENTO QUE ATRAVIESAN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES A PARTIR DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS Y UNA CLARA POLÍTICA DE DESLEGITIMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ¿CUÁLES DESTACARÍAS COMO LOS PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS UNIVERSIDADES DE CARA AL PRESUPUESTO 2025?

En primer lugar, este año, al igual que en 2024, no vamos a contar con un presupuesto aprobado por el Congreso. Esto otorga al poder Ejecutivo la posibilidad de tener un mayor manejo discrecional. Desde el gobierno afirman que ante la necesidad de mantener la premisa de “déficit cero” no era posible que presentara mejoras. El presupuesto de las universidades continuará, entonces, un camino similar al de 2024, lo que nos coloca en una situación de incertidumbre ya que no nos permite realizar una planificación mínima necesaria para llevar adelante la gestión de estas instituciones.

En ese sentido, es necesario clarificar algunos datos que permiten comprender el ajuste. En 2024 se aplicó un drástico recorte en la ejecución presupuestaria de las universidades del orden del 33%. Esto afectó fundamentalmente a los sueldos de los docentes y de los nodocentes. El proyecto de Presupuesto 2025, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que suponemos es el que se implementará este año, estipula que los fondos nacionales para educación tendrán un incremento del 0,65%, tras una disminución del 40,20% en 2024 respecto de 2023. En términos del PBI, la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88%, quedando por debajo de 2024 (0,91%) y de 2023 (1,48%). Claramente, en el Presupuesto 2025 no se observa una recuperación. Esto implicará, seguramente, la continuidad de la lucha del sistema

universitario por sostener la calidad académica y por alcanzar salarios dignos que permitan a los trabajadores docentes y nodocentes llevar adelante sus tareas por remuneraciones acordes con la realidad socioeconómica del país.

A pesar de los recortes presupuestarios y de las políticas que deslegitiman las instituciones públicas, las universidades nacionales debemos asegurar nuestro normal funcionamiento. Intentaremos evitar que los recortes afecten la calidad de los programas educativos y sostener la actualización tecnológica, la formación docente continua y la adecuación de planes de estudio a partir de distintas acciones. Principalmente, se debe garantizar un financiamiento sostenible y adecuado, es decir, asegurar los recursos para cubrir actividades esenciales como docencia, investigación y extensión, además de enfrentar el impacto de los costos crecientes en infraestructura y servicios básicos. Asimismo, consolidar el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes de sectores vulnerables requiere mayor inversión en becas y en transporte, al igual que mitigar la brecha digital y las desigualdades que se profundizan con las limitaciones presupuestarias.

Es importante comprender la complejidad del funcionamiento sistémico de las universidades. En la actualidad se financian actividades básicas (investigación, cargos docentes, infraestructura y extensión, etc.) pero la universidad es una comunidad de docentes, investigadores, estudiantes, integrantes del sector productivo vinculados con el conocimiento y vecinos y esa comunidad requiere ser nutrida también con congresos, jornadas, actividades y difusión de esas actividades. Por eso, garantizar recursos para mejorar la calidad académica es fundamental. Sin fondos, no se pueden encarar proyectos de innovación que involucren profesionales o docentes que trabajen en estas propuestas. Sin ir más lejos, el sistema de créditos y la incorporación de un sistema interno de mejoramiento de la calidad, las dos nuevas normativas que se aprobaron con gran consenso en todo el sistema universitario, necesitan tiempo y dinero.

En ese sentido, tenemos que defender la asignación de recursos para las universidades y para la investigación científica por su rol clave para la innovación y para la solución de problemas nacionales. Necesitamos enfrentar, así la fuga de talentos, ya que la reducción de fondos limita oportunidades para investigadores jóvenes. Pero, además, debemos seguir impulsando la vinculación con el sector productivo, con las comunidades locales y con los organismos internacionales para generar proyectos autofinanciados. También, apuntamos a desarrollar una gestión cada vez más eficiente y transparente, optimizando el uso de los recursos asignados para priorizar áreas

críticas sin comprometer el funcionamiento general y reforzando la transparencia y la rendición de cuentas que realiza el Área de Auditoría para legitimar el destino del presupuesto ante la sociedad.

Complementariamente, se debe fortalecer la defensa de la autonomía universitaria, protegiendo la independencia académica y administrativa frente a intentos de condicionamiento político o económico. Para esto, hay que promover el reconocimiento del valor estratégico de las universidades públicas en el desarrollo nacional. Por eso, un objetivo central será visibilizar su impacto positivo, contrarrestando narrativas de deslegitimación.

Desde esta perspectiva, la capacidad de las universidades para articularse con actores sociales, demostrar su valor público y trabajar de forma colaborativa será fundamental para enfrentar estos retos y garantizar su sostenibilidad en 2025 y más allá.

¿CÓMO SE VEN AFECTADAS LAS UNIVERSIDADES DEL CONURBANO BONAERENSE? ¿SE ESTÁ PUDIENDO SOSTENER LA OFERTA NORMAL DE CARRERAS, CURSOS Y SEMINARIOS DE GRADO Y POSGRADO? ¿SE ENCUENTRAN AFECTADOS LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DE EXTENSIÓN? ¿QUÉ ACTIVIDADES SE PRIORIZAN EN ESTE ESCENARIO? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN DE LA UNTREF EN SU RELACIÓN Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD LOCAL?

Históricamente, la UNTREF ha mantenido un compromiso activo con la comunidad de Tres de Febrero y sus alrededores gracias a su Secretaría de Extensión Universitaria que prioriza iniciativas culturales, educativas, deportivas y sociales y el apoyo a escuelas locales; también a un trabajo constante de vinculación con sectores vulnerables para garantizar la inclusión educativa, sosteniendo programas de acceso y permanencia en un contexto en el que muchos estudiantes son primera generación universitaria, y a una oferta académica con variedad de carreras, seminarios y posgrados que prioriza las de mayor demanda social e impacto en su región.

Lamentablemente, las universidades del conurbano bonaerense enfrentan actualmente un panorama particularmente complejo debido a los recortes presupuestarios, panorama que se ve agravado por las condiciones sociales y económicas que demandan un mayor compromiso con la inclusión y el desarrollo local. Esta situación genera imprevisibilidad y es una limitación para la gestión porque no permite desarrollar una planificación financiera ni proyectos con eficiencia. Así se afecta la racionalidad de la planificación a mediano plazo, ya que muchos de los procesos académicos no se realizan solamente en un año calendario sino en un tiempo mayor.

Por estas restricciones, los gastos corrientes de las universidades terminan siendo asignados, también, a proyectos nuevos. Esto impacta en obras de infraestructura, laboratorios, equipamiento informático, pero, también, en la sostenibilidad de proyectos en curso, generando un efecto negativo en la innovación tecnológica y en la calidad de la formación, la investigación y la extensión.

Como consecuencia de la reducción del ingreso que se produjo por no haber acompañado con aumentos salariales el índice de inflación durante los primeros meses de 2024 se generó una pauperización de los ingresos de las categorías más bajas de docentes y nodocentes que deterioró su calidad de trabajo y de vida al quedar afectados, incluso, su traslado a la universidad y/o su acceso a la vivienda por las subas desmedidas en los costos de transporte y de los, alquileres. Por su parte, la significativa disminución de los sueldos de los docentes investigadores y de investigadores del CONICET y de los montos de las becas CONICET y/o CIC pone en riesgo la continuidad de varias líneas de investigación. Tenemos un becario doctoral, por ejemplo, que abandonó su beca para ir a trabajar a una universidad privada por un ingreso muy superior.

Los recortes presupuestarios suponen, además, un impacto negativo en la oferta académica. Las universidades enfrentamos dificultades para sostener la oferta regular de carreras de grado y posgrado. Tuvimos que limitar la apertura de nuevas cohortes, racionalizar cursos o posponer actualizaciones curriculares. Los seminarios optativos y las actividades de formación complementaria fueron los más afectados.

Simultáneamente algunos programas de investigación están siendo ralentizados o interrumpidos por falta de financiamiento. Esto afecta no solo a los proyectos en curso sino, también, a la generación de conocimiento estratégico en y para la región. Cabe destacar que la escasez de fondos desincentiva la incorporación de investigadores jóvenes, lo que genera riesgos a largo plazo en términos de innovación.

También los programas de extensión universitaria, claves en el vínculo con las comunidades locales, disminuyeron por la falta de previsibilidad y financiamiento. Algunos se sostienen gracias al esfuerzo de docentes y estudiantes, muchas veces sin recursos específicos. El ajuste impactó en proyectos comunitarios, congelando las acciones que se venían realizando como el trabajo con personas mayores en formación preventiva en temas de salud, las relaciones con algunos clubes de barrio, las

formaciones cortas para jóvenes, las búsquedas de primer empleo, los vínculos con escuelas secundarias, los talleres en museos, etc.

La extensión es una tarea fundamentalmente de entramado con la comunidad que necesita presupuesto para solventar sus gastos y para que sus proyectos se puedan llevar adelante. No requiere abultados presupuestos pero precisa una pequeña inversión para la compra de materiales, la organización de eventos y el costo del transporte.

En este escenario, es prioritario garantizar el funcionamiento básico de las actividades de grado, aunque sea con ajustes en horarios, frecuencias o formatos, como la virtualidad. También se busca sostener becas y programas sociales y de inclusión para sectores vulnerables dada la realidad del conurbano, aunque con limitaciones. Complementariamente, se va a seguir consolidando la articulación con el sector productivo, privilegiando proyectos de transferencia tecnológica y vinculación que puedan generar ingresos o tener un impacto directo en el desarrollo local. Además, impulsaremos el uso de la [Plataforma de Oportunidades de Financiamiento](#) para obtener los mayores recursos internacionales posibles para continuar líneas de investigación y abrir nuevas. Esperamos en 2025 poder recuperar algo del financiamiento para las actividades que se frenaron y que en los últimos años se habían consolidado a través de una asignación específica de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, creada para que cada universidad pueda mantener y promover acciones comunitarias y de intervención. A su vez, vamos a autofinanciar gran parte de las actividades de extensión con algún tipo de aporte de los participantes de la comunidad, aunque, segura y lamentablemente, esto reducirá la asistencia.

En este contexto, la UNTREF se esfuerza por mantener su compromiso con la comunidad local, aunque con restricciones que la obligan a priorizar actividades esenciales y programas con impacto directo en el territorio.

Uno de los principales objetivos de las universidades del conurbano fue brindar a los habitantes de esas zonas una oferta de cercanía para facilitar el acceso a la educación superior. ¿Qué datos concretos expresan el logro de esos objetivos?

Las universidades del conurbano logramos importantes avances en la democratización del acceso a la educación superior. Hay datos concretos y evidencias que reflejan el cumplimiento de esos objetivos. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), han experimentado un aumento constante en la matrícula desde su creación.

Entre 2005 y 2020, la cantidad de estudiantes creció más del 200%, mientras que el promedio nacional fue del 70%. Particularmente, la UNTREF pasó de tener menos de 5.500 inscriptos en 2005 a más de 30.000 en la actualidad. De las decenas de miles de estudiantes que transitan estas aulas muchos provienen de sectores sociales históricamente excluidos de la educación superior. En la UNTREF, más del 75% son primera generación universitaria. Esto evidencia el rol fundamental de estas casas de estudios superiores para romper barreras de exclusión históricas y promover la movilidad social ascendente.

Además, las universidades del conurbano estamos registrando mejoras importantes en la tasa de graduación gracias a programas de acompañamiento para estudiantes en situación de vulnerabilidad. La UNTREF implementa políticas activas para reducir la deserción y aumentar el compromiso de los estudiantes.

Estos logros fueron resultado de múltiples planificaciones y esfuerzos. La ubicación estratégica de estas universidades en zonas densamente pobladas ha permitido a miles de jóvenes acceder a estudios superiores sin tener que recorrer largas distancias ni abonar costos más elevados de transporte y vivienda. Por otra parte, sus ofertas académicas están orientadas por las necesidades de la zona. Por ejemplo, la UNTREF dicta carreras innovadoras y pertinentes para el desarrollo local y regional, como Ingeniería en Sonido, Nutrición, Enfermería, Gestión Cultural o Economía Social. Además, ofrecemos turnos nocturnos y formatos semipresenciales para los estudiantes que trabajan, favoreciendo aún más la inclusión. También proponemos programas de extensión orientados a la comunidad de Tres de Febrero y zonas aledañas, como capacitación laboral, talleres educativos, culturales, artísticos e, incluso, de alfabetización tecnológica, que han beneficiado a miles de habitantes de la región. Finalmente, los proyectos de investigación que promueven estas instituciones suelen apuntar a resolver problemáticas locales, como el desarrollo urbano, el medio ambiente y la inclusión social.

Por todo esto, podemos afirmar que las universidades del conurbano bonaerense, incluida la UNTREF, han logrado avances concretos para democratizar el acceso a la educación superior, fomentando la inclusión de sectores postergados, reduciendo barreras geográficas y económicas y fortaleciendo el desarrollo regional a través de su oferta académica y vinculación comunitaria.

Sumando el conflicto que afecta las universidades, las dificultades del contexto económico, que particularmente afecta a las familias de los sectores populares, que prioritariamente atiende esta universidad, ¿crees que puede influir en las futuras [tasas de graduación](#)? ¿Pensás que la situación puede influir negativamente en el ingreso (acceso) y la graduación? ¿Cómo se prevé o aborda esta cuestión?

La tasa de graduación de las universidades públicas en general es un problema fuertemente vinculado con la situación socioeconómica pero, también, con factores propios del desarrollo académico. Es un tema que se aborda en todas las universidades y que trabajamos para mejorar. Las familias de sectores populares suelen enfrentar mayores dificultades para sostener gastos asociados con la educación (transporte, materiales, conexión a internet, etc.). La necesidad de trabajar tiempo completo para contribuir al ingreso familiar puede llevar a muchos estudiantes a abandonar o prolongar sus estudios. Por eso, la combinación de recortes presupuestarios y las dificultades del contexto económico pueden influir negativamente en las tasas de ingreso y graduación en universidades como la nuestra que atienden prioritariamente a sectores populares. Por un lado, la falta de presupuesto puede afectar la calidad de la formación por la reducción de la oferta académica, las dificultades de mantenimiento de infraestructura o el menor acceso a laboratorios, bibliotecas virtuales y servicios estudiantiles. Por el otro, la incertidumbre económica y las dificultades cotidianas generan estrés y desmotivación, especialmente en estudiantes sin redes de apoyo académico o familiar.

Conscientes de estos desafíos, en la UNTREF implementamos políticas para mitigar el impacto negativo en el acceso y en la graduación de estudiantes, aunque muchas están condicionadas por la disponibilidad presupuestaria. Por un lado, ofrecemos becas y apoyo económico para garantizar la permanencia de aquellos vulnerables. Además se han fortalecido las tutorías y programas para estudiantes en riesgo de abandonar, buscando detectar problemas a tiempo y brindar apoyo académico y emocional a través de un acompañamiento personalizado. También hemos adaptado los horarios para quienes trabajan y hemos sumado modalidades semipresenciales como estrategias clave para evitar la deserción por incompatibilidades entre estudio y trabajo. Finalmente, seguimos impulsando la articulación con municipios y organismos estatales para implementar políticas que beneficien a nuestros jóvenes y proyectos de extensión en sectores vulnerables para vincularlos con su comunidad y generar redes de apoyo y sentido de pertenencia que incentiven la continuidad de su formación.

Resumiendo, la situación económica actual claramente representa un desafío para las tasas de ingreso y graduación. Sin embargo, la experiencia nos muestra que en épocas de crisis es más la gente que se acerca a la universidad en busca de formación académica. La cantidad de inscriptos en la UNTREF este año es muy similar a la de años anteriores. En ese sentido, las universidades públicas han demostrado resiliencia en contextos adversos y mantienen un fuerte compromiso con la inclusión. En el caso de la UNTREF será fundamental continuar implementando políticas de apoyo integral para garantizar que los estudiantes puedan no solo ingresar sino también completar sus estudios, fortaleciendo así el rol transformador de estas instituciones en el desarrollo social.

El conflicto universitario atraviesa la labor cotidiana tensionando el funcionamiento de nuestras instituciones y parece estar lejos de terminar. ¿Cuáles son las alternativas que visualizás en el conflicto y por qué carriles discurrirá?

El conflicto universitario actual, marcado por los recortes presupuestarios, la deslegitimación de las instituciones públicas y el difícil contexto económico, plantea desafíos profundos para el funcionamiento cotidiano de las universidades.

Se observa un cambio de época en el tratamiento del tema universitario. Hasta el año pasado y durante mucho tiempo, el CIN y el CRUP fueron adecuando y acordando con los responsables de la política oficial: había fluidez en la construcción de iniciativas de reforma e innovación (duración de las carreras, créditos, evaluación de la calidad, etc.). Pero ahora este formato se modificó por un estilo de confrontación por parte del Poder Ejecutivo que se apoya en la llamada “batalla cultural” para denostar y maltratar un área clave para el desarrollo productivo de nuestro país.

Este panorama genera tensiones que afectan desde la gestión administrativa hasta la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión. Su resolución supone que el gobierno y las universidades logremos alcanzar acuerdos presupuestarios. Este escenario requiere voluntad política, compromiso social y un fortalecimiento de la narrativa sobre el valor de la universidad pública. También una discusión acerca de qué tipo de universidades queremos porque esto define la adecuación o no del presupuesto. Si no se garantiza un financiamiento adecuado, el deterioro de las condiciones laborales y educativas podría hacer escalar la disputa. En este marco, las alternativas para abordar el conflicto pueden discurrir por diferentes carriles, aunque su resolución

dependerá de la capacidad de articulación entre los actores involucrados y del contexto político y económico.

Inicialmente se debe impulsar una negociación política para el fortalecimiento del presupuesto universitario. Por un lado, las universidades, a través del CIN y otros organismos, pueden intensificar la presión sobre el gobierno para garantizar un presupuesto adecuado. Por el otro, la movilización de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, nodocentes) juega un papel clave para visibilizar el impacto de los recortes y exigir políticas educativas que prioricen la universidad pública.

Históricamente la protesta social ha sido una herramienta central en la defensa de la universidad pública. Movilizaciones masivas como la del mes de abril de 2024 lograron que el gobierno retroceda en ciertos recortes y visibilizaron el conflicto ante la sociedad. Una articulación entre los gremios docentes, estudiantiles y la comunidad educativa podría presionar a las autoridades nacionales para priorizar el sistema universitario en las agendas públicas. En ese sentido, las universidades tienen que buscar alianzas con sindicatos, organizaciones sociales y comunidades locales para reforzar su rol como motor en el desarrollo territorial. Esto ayudaría a contrarrestar narrativas de deslegitimación y evidenciar su impacto en el bienestar colectivo. Se debería mejorar la conexión entre las universidades y la sociedad a través de campañas de comunicación masivas que muestren casos concretos de cómo su labor contribuye en el crecimiento económico, social y cultural del país.

Por su parte, se deben implementar estrategias de optimización y autogestión. En un contexto de restricción presupuestaria, las universidades pueden reforzar mecanismos de eficiencia administrativa y priorizar recursos para áreas esenciales (docencia, inclusión, investigación estratégica). La generación de ingresos propios mediante acuerdos con el sector privado, proyectos de transferencia tecnológica o financiamiento internacional es una alternativa para sostener programas específicos (investigación, infraestructura, becas, etc.).

En conclusión, el camino que tome este conflicto dependerá de la capacidad de los actores para articular soluciones que garanticen el sostenimiento de la universidad pública como pilar de inclusión, desarrollo e igualdad de oportunidades. La defensa de la educación superior como derecho social deberá ser el eje rector para trazar una salida sostenible y equitativa.